



**AMERICAN
PSYCHOLOGICAL
ASSOCIATION**
SERVICES, INC.

American Psychological Association Services, Inc.

Testimonio presentado el 10 de junio, 2020

por el Dr. Arthur C. Evans, Jr., PhD

Director Ejecutivo y Vicepresidente Ejecutivo de la Asociación Americana de Psicología
ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos

Audiencia de supervisión sobre responsabilidad en prácticas de vigilancia policial y orden público

Nuestra nación está en medio de una pandemia de racismo. El racismo es una crisis de salud pública que requiere en estos momentos la plena atención de nuestro país. Las consecuencias de esta pandemia son nefastas, en particular para los ciudadanos afroamericanos y otras comunidades de razas diferentes a la blanca, las cuales sufren de manera directa y desproporcionada el racismo estructural arraigado dentro de nuestra sociedad, que abarca desde nuestro sistema de justicia penal hasta nuestras escuelas, y desde los centros laborales a nuestro sistema de salud. Entre las consecuencias del racismo continuo y estructural para la salud pública están la enfermedad física y mental. Hace mucho tiempo que deberíamos haber eliminado estas injusticias.

La Asociación Americana de Psicología (American Psychological Association, APA) es la principal organización científica y profesional que representa a la psicología en los Estados Unidos, con más de 121,000 investigadores, educadores, clínicos, asesores y estudiantes. Desde la década de los años cuarenta del siglo pasado, los psicólogos han hecho contribuciones científicas fundamentales a nuestra visión de la naturaleza del prejuicio, los estereotipos y su impacto en la conformación de acciones, emociones y opiniones humanas. Las contribuciones de los psicólogos, expertos en el comportamiento humano, son vitales para la solución de los problemas sociales referentes al delito, justicia, vigilancia policial, y raza.

APA mantiene su compromiso con la labor compleja y difícil del cambio. Nuestra convicción permanente como organización, es que el cambio comienza con nuestra disposición a participar en diálogos abiertos y honestos sobre problemas difíciles. Estos problemas de racismo sistémico y personal son complejos y multifacéticos, y como tal, requerirán métodos multifacéticos y basados en evidencias. Agradecemos al Comité la oportunidad de participar en este diálogo, y esperamos colaborar con ustedes en el fomento de políticas para reducir las disparidades raciales en el sistema de justicia penal.

La raza y el sistema de justicia penal

Las disparidades raciales en el sistema de justicia penal están bien documentadas y generalizadas, particularmente en las áreas de vigilancia policial, poblaciones penales y participación en jurados. Varios estudios indican que los afroamericanos son más propensos que sus contrapartes de la raza blanca a reportar estrés como resultado de encuentros con oficiales de policía; y existe un robusto conjunto de investigaciones que demuestran el impacto

APA.ORG

APASERVICES.ORG

Advocating for APA members and psychology

750 First Street, NE
Washington, DC 20002-4242

202.336.5800
202.336.6123 TDD



fisiológico y psicológico del racismo y la discriminación, y su vinculación con el estrés (Gellar, Fagan, Tyler & Link, 2014; Utsey et. al, 2008). Aunque el trastorno crónico de estrés puede tener efectos colaterales negativos para todas las personas, los factores psicosociales y contextuales singulares, específicamente el contacto frecuente y generalizado con el racismo y la discriminación, les crea un estresante cotidiano adicional a los afroamericanos. Este estrés se asocia a un conjunto de consecuencias psicológicas como depresión, ansiedad y otros trastornos graves y en ocasiones debilitantes, como el estrés postraumático (PTSD), y los trastornos ocasionados por el uso de sustancias. Más aun, el estrés ocasionado por el racismo puede contribuir al surgimiento de enfermedades físicas como afecciones cardiovasculares y de otra índole (Calvin, et. al., 2003).

La teoría del predominio social postula que las sociedades minimizan el conflicto grupal, creando consensos sobre ideologías que promueven la superioridad de un grupo sobre otros (Pratto, Sidanius, Stallworth & Malle, 1994). Dicha teoría afirma que la desigualdad invariable entre grupos es mantenida, en parte, mediante el uso de fuerza desproporcionada contra los grupos subordinados. Las personas con orientación de predominio social relativamente alta, tienden a sentir atracción por ejercer profesiones en el cuerpo policial (Sidanius, Pratto, Sinclair, & Van Laar, 1996).

Las detenciones policiales inadecuadas, en particular, son solo una forma de violencia psicológica que implica graves consecuencias para las personas que no son de la raza blanca. La discriminación por perfil racial—el uso de la raza, etnicidad u origen nacional por parte de los oficiales policiales a la hora de decidir a quién deben parar, registrar o detener—ha sido bien documentada a lo largo del sistema de justicia penal. Tales incidentes no solo son más frecuentes en casos de afroamericanos en comparación con los estadounidenses blancos. Varios estudios revelan que los oficiales de la policía tratan con mucho menos respeto a miembros de la comunidad negra en comparación con los blancos cuando hacen paradas cotidianas de tráfico, incluso después de evaluar por raza del oficial, gravedad de la infracción, lugar de la parada, y resultado de la misma (Voight et al., 2017). Dichos estudios han revelado que los registros y el uso de la fuerza en determinadas barriadas estuvieron vinculados a niveles más altos de aflicción en los hombres que habitan en las mismas (Sewell, Jefferson, & Lee, 2016). Las investigaciones que analizaron conductas presuntamente ilegales que varían en gravedad desde relativamente menores (por ejemplo, infracciones de tránsito) a más graves (por ejemplo, amenazas o violencia real) indican que los oficiales policiales son más propensos a la indulgencia y el uso de menos fuerza con sospechosos blancos que con negros (Kovera, 2019). Finalmente, varios estudios han demostrado que, incluso ante la ausencia de violencia física, las paradas por parte de oficiales de orden público consideradas injustificadas, discriminatorias o invasivas, siguieron asociadas a resultados mentales adversos como ansiedad, depresión y PTSD (DeVylder, et. al., 2017; Gellar, Fagan, Tyler & Link, 2014).

Las investigaciones sugieren que algunas de esas disparidades pudieran ser el resultado de prejuicios raciales implícitos o explícitos, o actitudes que afectan nuestro entendimiento, acciones y decisiones de forma inconsciente. Los prejuicios implícitos son opiniones



(estereotipos) y sentimientos (prejuicio) que se activan sin intención ni control, y están a menudo al margen del conocimiento consciente con limitado control consciente. Existen investigaciones psicológicas sustanciales demostrativas de que incluso personas bienintencionadas y desprejuiciadas tienen reservas inconscientes, consideradas como un atributo humano (Dovidio, Hewstone, Glick & Esses, 2010). Estos prejuicios, bajo condiciones de amenaza y desafío físico y cognitivo, pueden predisponer a las personas a tener respuestas más agresivas y, por tanto, podrían facilitar el uso de la fuerza excesiva de la policía contra los afroamericanos.

Los psicólogos han realizado investigaciones referentes a cómo los estereotipos afectan nuestras conjeturas sobre otras personas, particularmente cómo los miembros de grupos mayoritarios consideran a miembros de grupos minoritarios. Las raíces del prejuicio racial implícito contra los afroamericanos son complejas, y basadas fundamentalmente en la vergonzosa historia de deshumanización en los Estados Unidos. Por ejemplo, aunque las representaciones históricas que describían explícitamente a los negros como semejantes a monos han desaparecido en gran medida en los Estados Unidos, las investigaciones demuestran que los ciudadanos estadounidenses siguen asociando implícitamente a negros con monos. En el contexto de las fuerzas policiales, esta asociación modifica la percepción visual y la atención, e incrementa la justificación de la violencia contra sospechosos de la raza negra (Goff, Eberhardt, Williams & Jackson, 2008). Varias investigaciones psicológicas han demostrado que el prejuicio racial ha ejercido impacto en algunas decisiones de vigilancia policial (Glaser, Spencer, Charbonneau, 2014). En cuanto al tema de los disparos contra personas desarmadas de la raza negra, los estudios han demostrado que la simple observación del rostro de un afroamericano hizo que las personas (oficiales de la policía entre ellas) fueran más propensas a “percibir” la presencia de un arma inexistente (Eberhardt, Goff, Purdie & Davies, 2004). Además, los estudios han revelado, durante un simulacro, el impulso a disparar más rápido contra un negro armado que contra un blanco también armado, así como una mayor propensión a “disparar” erróneamente contra un negro desarmado que contra un blanco (Correll, Park, Judd & Wittenbrink, 2002). Este prejuicio del tirador se relaciona con la potencia de las asociaciones personales implícitas entre personas negras versus blancas, y armas de fuego (Glaser & Knowles, 2008).

Operaciones y estrategias de vigilancia policial

La investigación psicológica puede proporcionar orientación a las iniciativas de la fuerza policial para reducir el delito e incrementar la confianza de la comunidad. Durante las últimas décadas, se han producido repetidas situaciones de conflictos violentos entre policías y civiles, en particular entre oficiales de policía y personas de razas diferentes a la blanca. La muerte reciente de George Floyd en Minneapolis, MN, reafirma una relación arraigada entre ciudadanos de razas no blancas y fuerzas de la orden caracterizada por la desconfianza mutua. La policía sospecha de los miembros de la comunidad, y, por su parte, los miembros de la comunidad tienen poca confianza en los propósitos de la policía. La desconfianza pública ante la policía es importante, porque los estudios revelan que la escasa confianza lleva a grandes conflictos. Además, las investigaciones demuestran una asociación entre las muertes de



personas de la raza negra a causa de una intervención jurídica, con una subsecuente insuficiencia de salud mental entre adultos negros que habitan en el mismo estado (Bor, Venkataramani, Williams, & Tsai, 2018). Lo anterior ilustra las repercusiones negativas que el conflicto violento entre afroamericanos y fuerzas de orden público puede implicar para la población en general.

La investigación psicológica demuestra que un factor vital en la definición de la obediencia de las leyes, es precisamente la confianza en las leyes y en las autoridades jurídicas. Los estudios de la policía indican que la violación de las leyes y la comisión de delitos se deben mucho más a la falta de confianza en la policía, que al concepto de que la transgresión de las leyes implica arresto y castigo. La desconfianza también hace cada vez más difícil el control de la delincuencia, porque disminuye la disposición de la comunidad a ayudar a la policía a solucionar crímenes o identificar criminales. Al no haber confianza, los hechos de este tipo se intensifican con demasiada frecuencia hasta llegar a la violencia. Al faltarles la fe en las intenciones de las autoridades, las personas se dejan llevar por expresiones de frustración y enojo.

Varios estudios han demostrado sistemáticamente que los factores más importantes relacionados con evaluaciones públicas de la policía se enfocan en si la misma está ejerciendo su autoridad con justicia (Tyler, 2001). Para abordar esta cuestión, las investigaciones de psicólogos industriales-organizacionales (I-O) en particular, han aclarado varios temas relevantes a la vigilancia policial, como selección del personal, capacitación, evaluación de rendimiento, liderazgo y cultura organizacional. Con relación a la selección de personal en particular, los psicólogos I-O que trabajan con agencias de orden público pueden apoyarse en la literatura existente sobre prejuicios raciales, para respaldar con información procedimientos de selección de personal que ayuden a identificar los conceptos de los candidatos sobre las minorías, prejuicios y potencial de conductas hacia ciudadanos pertenecientes a minorías diferentes a las adoptadas con ciudadanos de otros segmentos no minoritarios de la población (Ruggs, et. al., 2016). Estos investigadores abordan específicamente el problema de la brutalidad policial contra ciudadanos de la raza negra, y ofrecen varias orientaciones para futuras investigaciones y prácticas. Además, los investigadores (McCluney et al., 2017) describen cómo los acontecimientos raciales traumáticos pueden ejercer impacto en empleados de la raza negra que no son víctimas directas del racismo, sino testigos, en una organización o sociedad en general. Claramente, el racismo es evidente en contextos laborales, y tiene consecuencias negativas tanto para aquellos que son víctimas del racismo, como para quienes lo presencian. APA respalda la formulación de políticas que promueven la aplicación de la ley sistemáticamente y sin prejuicio; orientan a las fuerzas del orden a no tomar decisiones sobre a quién deben parar atendiendo a su raza; y garantizan que los oficiales estén dispuestos a escuchar a las personas cuando las paran, incluyendo una explicación de las razones de sus acciones por parte de los oficiales. Una solución potencial a percepciones negativas de la policía es la vigilancia policial comunitaria, que se propone mejorar las relaciones entre las fuerzas del orden y la comunidad. La vigilancia policial comunitaria también le da a la policía



un mayor sentido del servicio a la comunidad, y proporciona más interacción entre las fuerzas del orden y las comunidades a las que prestan servicios (Greene, 2000).

Pero, sobre todo, las fuerzas de orden público deben tratar a los miembros de la comunidad con dignidad y respeto. Ese tratamiento incluye a personas con enfermedades mentales. En el 2018, aproximadamente 1,000 personas perdieron la vida a consecuencia de disparos por parte de oficiales de la policía. Cerca del 25 por ciento de esos incidentes fatales involucró a personas con enfermedades mentales (Saleh, et. al., 2018). Varios estudios han demostrado la efectividad de los equipos de intervención en crisis en la capacitación de oficiales de la policía, para manejar de forma segura y efectiva situaciones que involucran a personas con graves enfermedades mentales, incluyendo el mejoramiento de las actitudes y una reducción del estigma en oficiales policiales (Godschalx, 1984; Compton, et. al., 2006).

Recomendaciones

- **Promover la vigilancia policial comunitaria.** APA solicita al Congreso la implementación de la vigilancia comunitaria en todo el país. Apoyamos firmemente métodos de justicia procesal en los cuales el objetivo central del sistema de justicia penal sea incrementar la cooperación, alianza y confianza entre las comunidades y sus agencias de orden público. Políticas que estimulen el cumplimiento voluntario de las leyes por medio del mejoramiento de la confianza y la autenticidad, no de enfatizar ese cumplimiento mediante preocupaciones por el castigo.
- **Prohibir tácticas de sometimiento por el cuello y estrangulación.** APA solicita al Congreso el trabajo bipartidista para buscar soluciones en el estatuto de leyes de derechos civiles penales, para prohibir el uso de tácticas policiales que impliquen la aplicación de presión sobre el cuello o la tráquea de una persona, las cuales pudieran impedir u obstaculizar la respiración o dificultar la entrada de aire (por ejemplo, sometimiento por el cuello). Estas tácticas pueden ser letales o ejercer impactos neurocognitivos. Estas soluciones deben tener en cuenta tanto la seguridad del oficial en situaciones peligrosas, como la seguridad de las personas en su interacción con las fuerzas de orden público.
- **Invertir en equipos de intervención en crisis.** Los psicólogos desempeñan un papel vital en los equipos comunitarios de intervención en crisis que capacitan a oficiales de la policía para manejar con seguridad y efectividad situaciones que involucran a personas con graves enfermedades mentales. Estos equipos, personalizados por cada comunidad para satisfacer las necesidades locales, unifican las iniciativas de oficiales de policía, educadores de salud mental y activistas de la comunidad para resolver situaciones potencialmente violentas en formas positivas. Los equipos promueven prácticas de mitigación de conflictos para lograr mejores resultados.

APA solicita al Congreso a poner recursos adicionales a disposición de las comunidades para invertir en equipos de intervención en crisis que capaciten a las fuerzas policiales.



- **Incrementar la cantidad de profesionales de salud mental y conductual en las agencias de orden público.** APA recomienda que las agencias de orden público incrementen la cantidad de profesionales de salud mental en sus equipos. Los profesionales de salud mental y conductual pueden proporcionar capacitación y recursos para la identificación y mitigación de conflictos entre fuerzas policiales y comunidad. También son expertos en la identificación y solución de problemas que afectan a oficiales y personal policial como estrés, traumas, apoyo familiar y educación. Reconocer los desafíos que la vigilancia policial del siglo XXI implica para el personal de orden público, puede reducir el estrés de ejercer la vigilancia policial, y mejorar la capacidad de responder a desafíos comunitarios.
- **Incorporar a psicólogos en equipos multidisciplinarios para la implementación de reformas en la policía.** El Congreso debe incluir vocabulario específico en las legislaciones que exhorte a las agencias de orden público a la participación de policías expertos y especializados y psicólogos de seguridad pública (y otros profesionales de salud mental y laboral) en equipos multidisciplinarios para satisfacer las necesidades de implementar la vigilancia policial constitucional mediante la reforma de la policía. Los conocimientos profesionales de los psicólogos y la evidencia investigativa pueden ser particularmente valiosas para aquellas agencias a las que se le ha ordenado hacer transformaciones en cumplimiento del Decreto de Conciliación o Acuerdo de Conciliación del Departamento de Justicia, ya sea para contratar a personas idóneas, capacitarlas adecuadamente, proporcionar servicios de bienestar, o participar en una amplia gama de transformaciones organizacionales que incrementen la transparencia y responsabilidad ante la comunidad. Estos profesionales necesitan un empoderamiento para hacer trabajo imperativo, pues el mismo concierne a la supervisión continua de los niveles de estrés, salud mental, agotamiento y actitudes hacia el público de los oficiales de policía. Se necesitan psicólogos policiales para contribuir a la optimización de las culturas de departamentos de policía, creación de líderes, e institución de una orientación de la vigilancia policial enfocada a la “preservación de la vida”.
- **Estimular la creación de alianzas privadas /públicas entre organizaciones de salud mental y agencias locales de orden público.** El Congreso debe estar a la vanguardia en el progreso e incentivación de las agencias de orden público a formar alianzas privadas/públicas entre organizaciones de salud mental en los sectores público y privado, especialmente con aquellas que ofrecen conocimientos y servicios culturalmente competentes a poblaciones diversas. Estas alianzas pueden crear mejores métodos para abordar las relaciones comunidad-fuerzas policiales, que pueden difundirse ampliamente a departamentos de policía e instalaciones de salud mental de todo el país. Las alianzas policía-comunidad estimuladas por la Oficina de Vigilancia Policial Orientada a la Comunidad del Departamento de Justicia (por ejemplo, las ligas deportivas) pueden disminuir los estereotipos e incrementar la participación ciudadana.
- **Desestimular prácticas y políticas policiales que puedan provocar prejuicios implícitos y explícitos.** Las políticas y prácticas que incentivan a oficiales de orden público a cumplir con ciertos criterios, pudieran provocar respuestas enraizadas en prejuicios implícitos y explícitos. Por el contrario, el liderazgo policial debe promover políticas dirigidas a restringir la puesta en



práctica de prejuicios implícitos y/o explícitos, o que eliminen (o reduzcan, como mínimo) los resultados problemáticos en todas las comunidades. Las evidencias muestran que ciertos tipos de políticas preventivas pueden ser más efectivas en la reducción de disparidades raciales que las intervenciones dirigidas a eliminar el prejuicio implícito.

- **Solidificar la recopilación de datos.** La Iniciativa de Datos Policiales, creada en cumplimiento de las recomendaciones del Grupo Especial de Vigilancia Policial del Siglo XXI (Task Force on 21st Century Policing), respalda las iniciativas de los departamentos locales de policía para hacer uso de datos a fin de incrementar la transparencia y responsabilidad, y crear confianza en sus comunidades. Estos conjuntos de datos, diferentes a los recopilados con referencia a comisión de delitos, pueden incluir datos referentes a paradas y registros, uso de la fuerza, tiroteos con participación policial, u otras acciones de la policía. Hasta la fecha, estas agencias de orden público han dado a conocer más de 200 grupos de datos. APA solicita al Congreso el otorgamiento de más recursos a la Iniciativa de Datos Policiales, que muestra datos al público y propicia que los miembros de las fuerzas de orden público y de la comunidad sostengan conversaciones honestas sobre lo que ocurre en sus comunidades. Además, el Departamento de Justicia debe crear una base de datos nacional obligatoria sobre tiroteos con participación policial y uso de la fuerza, que contenga factores situacionales y aspectos demográficos. La actual fragmentación de sistemas voluntarios de datos dispersos por todo el país es inadecuada para la comprensión del alcance de estos incidentes, y la identificación de patrones. Asimismo, es necesaria una inversión nacional en la estandarización e investigación del uso continuo de la fuerza.
- **Respaldar la investigación.** El conocimiento adquirido con la investigación psicológica puede usarse para abordar las preocupaciones de la comunidad sobre la policía, así como proporcionar apoyo y capacitación a las fuerzas de orden público. APA respalda firmemente la inclusión del Proyecto de Ley de Justicia a través de la ciencia o *Justice through Science Act* (S. 2286/ H.R. 3989) en el trabajo del Comité para eliminar las disparidades raciales en la vigilancia policial. Esta legislación, presentada por el senador Brian Schatz y la representante Madeleine Dean, volvería a crear una Junta Asesora de Ciencia (Science Advisory Board, SAB) en el Departamento de Justicia, para contribuir a la eliminación de la separación entre investigación y práctica en los campos de justicia penal. Por medio de interacciones habituales con el liderazgo y personal de la Oficina de Programas de Justicia, los miembros de la SAB lograrían una valoración más profunda de las complejidades de implementar y evaluar métodos innovadores a la administración de justicia penal y juvenil. A partir de ahí, la SAB podría aportar su conocimiento de las perspectivas y necesidades de los formuladores y profesionales de la política a la comunidad de investigación, y contribuir a conformar una investigación que sea relevante a las comunidades y agencias policiales de nuestra nación. Además, el Congreso debe invertir en investigaciones psicológicas sobre cuestiones operacionales en las agencias de orden público con un enfoque en la mitigación de conflictos, la percepción del uso de la fuerza por parte de la comunidad, y técnicas no letales, así como estrategia de vigilancia policial.



Agradezco su compromiso con la eliminación de las disparidades raciales en nuestro sistema de justicia penal. APA y la comunidad de psicología están listos a colaborar con el Congreso y el gobierno en la solución de estos problemas importantes.

Referencias

Amodio, D. M., & Devine, P. G. (2005). Changing Prejudice: The Effects of Persuasion on Implicit and Explicit Forms of Race Bias.

Bor, J., Venkataramani, A. S., Williams, D. R., & Tsai, A. C. (2018). Police killings and their spillover effects on the mental health of black Americans: a population-based, quasi-experimental study. *The Lancet*, 392(10144), 302-310.

Calvin, R., Winters, K., Wyatt, S. B., Williams, D. R., Henderson, F. C., & Walker, E. R. (2003). Racism and cardiovascular disease in African Americans. *The American journal of the medical sciences*, 325(6), 315-331.

Compton, M. T., Esterberg, M. L., McGee, R., Kotwicki, R. J., & Oliva, J. R. (2006). Crisis intervention team training: Changes in knowledge, attitudes, and stigma related to schizophrenia. *Psychiatric services*, 57(8), 1199-1202.

Correll, J., Park, B., Judd, C. M., Wittenbrink, B. (2002). The police officer's dilemma: Using ethnicity to disambiguate potentially threatening individuals. *Journal of Personality and Social Psychology*, 83, 1314-1329.

DeVylder, J. E., Oh, H. Y., Nam, B., Sharpe, T. L., Lehmann, M., & Link, B. G. (2017). Prevalence, demographic variation and psychological correlates of exposure to police victimisation in four US cities. *Epidemiology and psychiatric sciences*, 26(5), 466-477.

Dovidio, J.F., Hewstone, M., Glick, P., & Esses, V.M. (2010). Prejudice, stereotyping, and discrimination: Theoretical and empirical overview. In J. F. Dovidio, M. Hewstone, P. Glick, & V. M. Esses, *Handbook of prejudice, stereotyping, and discrimination* (pp. 3-28). London: Sage.

Eberhardt, J.L., Goff, P.A., Purdie, V.J., & Davies, P.G. (2004). Seeing Black: Race, crime, and visual processing. *Journal of Personality and Social Psychology*, 87, 876-893.

Geller, A., Fagan, J., Tyler, T., & Link, B. G. (2014). Aggressive policing and the mental health of young urban men. *American journal of public health*, 104(12), 2321-2327.

Glaser, J., Knowles, E. D. (2008). Implicit motivation to control prejudice. *Journal of Experimental Social Psychology*, 44, 164-172.

Glaser, J., Spencer, K., & Charbonneau, A. (2014). Racial Bias and Public Policy. *Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences*, 1(1), 88–94. <https://doi.org/10.1177/2372732214550403>



Godschalx, S. M. (1984). Effect of a mental health educational program upon police officers. *Research in nursing & health*, 7(2), 111-117.

Goff, P. A., Eberhardt, J. L., Williams, M. J., & Jackson, M. C. (2008). Not yet human: implicit knowledge, historical dehumanization, and contemporary consequences. *Journal of personality and social psychology*, 94(2), 292.

Greene, J. R. (2000). Community policing in America: Changing the nature, structure, and function of the police. *Criminal Justice*, 3, 299-370

Kawakami, K., Phillips, C. E., Steele, J. R. & Dovidio, J. F. (2007). (Close) distance makes the heart grow fonder: Improving implicit racial attitudes and interracial interactions through approach behaviors. *Journal of Personality and Social Psychology*, 92, 957-971.

Kovera, M. B. (2019). Racial disparities in the criminal justice system: Prevalence, causes, and a search for solutions. *Journal of Social Issues*, 75(4), 1139-1164.

Langton, L., & Durose, M. R. (2013). Police behavior during traffic and street stops, 2011. Washington, DC: US Department of Justice, Office of Justice Programs, Bureau of Justice Statistics.

McCluney, C. L., Bryant, C. M., King, D. D., & Ali, A. A. (2017). Calling in Black: A dynamic model of racially traumatic events, resourcing, and safety. *Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal*, 36(8), 767-786.

Pratto, F., Sidanius, J., Stallworth, L. & Malle, B. (1994). Social dominance orientation: A personality variable predicting social and political attitudes. *Journal of Personality and Social Psychology* 67, no. 4: 741-763.

Ruggs, E. N., Hebl, M. R., Rabelo, V. C., Weaver, K. B., Kovacs, J., & Kemp, A. S. (2016). Baltimore Is Burning: Can I-O Psychologists Help Extinguish the Flames? *Industrial and Organizational Psychology*, 9(3), 525-547. Cambridge University Press.

Saleh, A. Z., Appelbaum, P. S., Liu, X., Stroup, T. S., & Wall, M. (2018). Deaths of people with mental illness during interactions with law enforcement. *International journal of law and psychiatry*, 58, 110-116.

Sewell, A. A., Jefferson, K. A., & Lee, H. (2016). Living under surveillance: Gender, psychological distress, and stop-question-and-frisk policing in New York City. *Social science & medicine*, 159, 1-13.

Sidanius, J., Pratto, F., Sinclair, S., & Van Laar, C. (1996). Mother Teresa meets Genghis Khan: The dialectics of hierarchy-enhancing and hierarchy-attenuating career choices. *Social Justice Research*, 9(2), 145-170.



**AMERICAN
PSYCHOLOGICAL
ASSOCIATION**
SERVICES, INC.

Tyler, T.R. (2001). Trust and law-abiding behavior. Building better relationships between the police, the courts, and the minority community. *Boston University Law Review*, 81, 361-406.

Utsey, S. O., Giesbrecht, N., Hook, J., & Stanard, P. M. (2008). Cultural, sociofamilial, and psychological resources that inhibit psychological distress in African Americans exposed to stressful life events and race-related stress. *Journal of Counseling Psychology*, 55(1), 49. Retrieved from <https://psycnet.apa.org/fulltext/2007-19995-004.pdf>

Voigt, R., Camp, N. P., Prabhakaran, V., Hamilton, W. L., Hetey, R. C., Griffiths, C. M., ... & Eberhardt, J. L. (2017). Language from police body camera footage shows racial disparities in officer respect. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 114(25), 6521-6526.